

SENTENCIA N°60-98 TRIBUNAL ADUANERO NACIONAL, SAN JOSE A LAS DIECISEIS HORAS DIEZ MINUTOS DEL PRIMERO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el agente de aduanas Miguel Porras Jimenez, en su condición de agente y representante de la Agencia de Aduanas Aduanera Ya S.A., contra la Resolución AL-164-98 de 24 de abril de 1998.

Resultando

1. Que la Aduana Central a solicitud de parte reconoce que se realizó una declaración incorrecta de del valor aduanero en la declaración aduanera N° 506164 de 23 de octubre de 1996, realizando la corrección pertinente y da inicio al procedimiento correspondiente de sanción, según Resolución ACT-M-233-AC-98 del 4 de diciembre de 1996. (ver folios 9 y 10).
2. Que a través de Resolución 840-AC-97 de 18 de junio de 1997, se emite el acto final imponiéndole una multa de C26.956.25 a la Agencia de Aduanas Ya S.A., por declarar erróneamente el valor aduanero, en la tramitación de la declaración aduanera N° 506164 de 23 de octubre de 1996 de la Aduana Central. (ver folios 25 y 26)
3. Que el agente de aduanas Miguel Porras Jimenez, en su condición de agente y representante legal de la Agencia de Aduanas Ya S.A. interpone los recursos de reconsideración y revisión jerárquica contra la Resolución 840-AC-97 de 18 de junio de 1997. (ver folios 27 y 28).
4. Que con Resolución 869-97 del 24 de junio de 1997, la Aduana Central rechaza el recurso de reconsideración y admite el de revisión jerárquica ante la Dirección

General de Aduanas, indicándole al recurrente que cuenta con cinco días para reiterar o ampliar sus argumentos ante el superior. (ver folios 32 a 34)

5. Que con Resolución AL-008-98 del 14 de enero de 1998 la Dirección General de Aduanas declara sin lugar el recurso de revisión jerárquica interpuesto, manteniendo la multa a la agencia impuesta por la Aduana Central, señalando además que el recurrente no presentó escrito ampliando o reiterando su pretensión. (ver folios 44 a 46)
6. Que el 27 de enero de 1998 el recurrente interpone recurso de apelación contra la Resolución AL-008-98 del 14 de enero de 1998 y un incidente de nulidad absoluta de lo actuado por la Aduana.
7. Que mediante Resolución AL-164-98 de 24 de abril de 1998 la Dirección General de Aduanas, anula la Resolución AL-008-98 del 14 de enero de 1998 y conoce del recurso de revisión jerárquica manteniendo lo actuado. Señalándose en este acto que se trata de una multa con base en el artículo 236 K de la Ley General de Aduanas. (ver folios 56 a 63)
8. Que a través de Resolución AL-238-98 de 17 de junio de 1998 se admite el recurso de apelación y se emplaza a la parte para ante el Tribunal Aduanero. (ver folio 70)
9. Que el recurrente tiene como principal pretensión en el recurso de apelación y en apersonamiento ante este Tribunal la nulidad de lo actuado. (ver folios del 50 al 55 y 72 a 81)
10. Que este Tribunal en fecha once de agosto del año en curso acogió el impedimento presentado por la Licenciada Shirley Eugenia Contreras Briceño y Desiderio Soto Sequeira, teniéndolos por separados del conocimiento del presente asunto. Asimismo por estar nombrados los Licenciados José Alberto Martínez Loría y

Ronald Garita López como Miembros Abogados Suplentes, mediante Acuerdos Números 80 y 81 ambos de 26 de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, por lo que a efectos de conocer el presente asunto se integran a este Tribunal.

11. Que en la tramitación del presente recurso se han observado los plazos y las prescripciones legales.

Redacta la Licenciada Elizabeth Barrantes Coto; y,

CONSIDERANDO

1. Por tratarse la nulidad un asunto de previo y especial pronunciamiento y por así indicarlo el artículo 195 de la Ley General de Aduanas y siendo una de las pretensiones del recurrente previo a entrar a considerar otros aspectos señalados, este Tribunal se avoca al conocimiento de eventuales nulidades en el proceso en estudio.
2. La Dirección de Aduanas mediante Resolución AL-164-98 de 24 de abril de 1998 mantiene lo actuado por la aduana y conoce todas las pretensiones del recurrente en el escrito de apersonamiento, anulando la Resolución AL-008-98 del 14 de enero de 1998, al considerar que es facultativo para el accionante, reiterar y ampliar los argumentos de su pretensión ante la Dirección General o simplemente atenerse a lo alegado por el a quo. No obstante para resolver las presentes diligencias es necesario analizar la participación de la agencia en los hechos que se le atribuyen y cuáles son sus responsabilidades conforme al marco legal aplicable y aquellas regulaciones que norman el actuar del agente aduanero persona física y jurídica en

materia de responsabilidad, tal y como lo ha venido analizando este Tribunal en reiterados fallos sobre el particular.

3. **Sobre la naturaleza del agente de aduanas.** De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 94 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, (en adelante CAUCA), el agente aduanero es un auxiliar de la función pública que actúa en su carácter de **persona natural** prestando servicios a terceros, habitualmente, en toda clase de trámites, regímenes y operaciones aduaneras. Asimismo el artículo 95, reitera el **desempeño personal** del agente aduanero y en el artículo 98, se remite a la legislación nacional sobre las infracciones que puedan cometer en el desempeño de su cargo, las penas a que serán acreedores y el procedimiento para su aplicación. En las disposiciones transitorias, el Código se encarga del ejercicio de **los agentes aduaneros, personas jurídicas** que hubieren sido autorizados conforme a la normativa del CAUCA I, señalando que será la legislación de cada país la que establecerá el régimen jurídico al que deberán someterse.

Por su parte la Ley General de Aduanas, (en adelante L.G.A) se encarga no sólo de **reiterar el carácter personal con que actúa el agente aduanero** sino que le establece el marco jurídico dentro del que debe actuar y las sanciones en caso de incumplimiento. (Artículos 33, 34 y 35)

4. **Régimen de responsabilidad del agente aduanero.** Sobre el agente aduanero, persona jurídica, encontramos el artículo 253 que establece el régimen jurídico al que quedan sujetas al indicar:

“Las empresas que ostenten la condición de agentes aduaneros, personas jurídicas en el momento de publicarse esta ley, deberán cumplir con las obligaciones y responsabilidades establecidas para el auxiliar de la función pública aduanera y con el régimen jurídico que esta ley impone para el agente aduanero persona física, conforme al título III, capítulos I y II de esta ley, incluyendo las disposiciones relativas a la rendición de garantías. Estas empresas deberán contar, por lo menos, con un agente aduanero en forma exclusiva y permanente para intervenir en regímenes y operaciones

aduaneras. Estos agentes representarán a la persona jurídica ante el Servicio Nacional de Aduanas”

Es claro que nuestra normativa aduanera permite la existencia de los agentes aduaneros persona natural que actúan directa e independientemente ante el Servicio Aduanero y los agentes aduaneros personas jurídicas, que actúan en los regímenes y operaciones aduaneras mediante la intervención de un agente aduanero persona física, quienes **para tales efectos representan a la persona jurídica ante el Servicio de Aduanas.**

Respecto de la responsabilidad del agente, tenemos entre otras:

Frente al Cliente : el agente -persona física o jurídica-, es el representante legal de su mandante para las actuaciones del despacho aduanero y los actos que de el deriven. En tal sentido es responsable civil ante su cliente por las lesiones patrimoniales que se originen como consecuencia del cumplimiento de su mandato (artículo 33 L.G.A.).

Frente al Fisco: el agente -persona física o jurídica- responde patrimonialmente no sólo por sus propias actuaciones sino también por las infracciones y los delitos en que incurran sus asistentes y personal acreditados (artículos 97, párrafo 2 del CAUCA, 33 y 254 párrafo 1 de L.G.A.).

Solidaridad: Además, el agente aduanero- persona física o jurídica-, es responsable solidario por el pago de las obligaciones tributarias aduaneras derivadas de las operaciones aduaneras en que intervienen y por el pago de las diferencias, intereses, multas y demás recargos (97 CAUCA y art. 36 LGA).

5. Materia sancionatoria. En esta materia debe hacerse una distinción según se trate de agente aduanero persona física o jurídica.

El agente persona física, responderá personalmente cuando su conducta se adecue en algunas de las infracciones previamente tipificadas por la legislación y la misma le sea atribuible a título de dolo o culpa, es decir, le sea reprochable, sin que concurra ningún eximente de responsabilidad.

Respecto al agente aduanero, persona jurídica, las reglas a aplicar en materia sancionatoria, están recogidas en el artículo 254 de la L.G.A., que reza:

“Las empresas asumirán la responsabilidad en forma solidaria, por los hechos y actos de sus dependientes cuando se derive un perjuicio tributario.

Sin perjuicio de las obligaciones y los deberes previstos para los agentes aduaneros y de las sanciones aplicables por su ejercicio personal, los representantes legales de la persona jurídica serán responsables de girar las instrucciones, proveer los instrumentos necesarios para la correcta gestión de intermediación aduanera y cumplir con las obligaciones que no corresponden al agente aduanero persona física por su relación laboral.

Las sanciones previstas en esta Ley se impondrán a la persona jurídica cuando se demuestre que los representantes legales o los personeros de la empresa han propiciado actos o hechos que posibilitan la sanción, de conformidad con lo expuesto en el párrafo anterior ; en caso contrario, responderá únicamente el agente de aduana acreditado” (Lo resaltado no es del texto).

Asimismo, ha indicado la Sala Constitucional:

“La doctrina más importante en esta materia ha señalado que resulta constitucional y legalmente posible la aplicación de sanciones administrativas a las personas jurídicas, en el tanto y en el cuanto éstas pueden ser sujeto de la obligación tributaria y porque al carecer dichas sanciones de pena privativa de libertad, no debe estar presente el principio de la personalidad de la pena que deriva del principio de la culpabilidad. De modo que, cuando se trata de ilícitos que no establecen la cárcel como sanción, las personas jurídicas pueden ser sujetos activos de tales ilícitos administrativos” (Voto número 5399-95).

6. Como consecuencia de lo anterior es necesario analizar en el caso concreto, la conducta atribuida a la agencia, para determinar si es correcto el proceder a imponer la sanción a la agencia de aduanas recurrente, por ser su conducta atribuible al

agente aduanero persona jurídica, debiendo determinarse si constan en expediente los elementos de juicio necesarios para llegar a tal conclusión, es decir, que los representantes legales o los personeros de la empresa han propiciado actos o hechos que posibiliten la sanción, por ejemplo girando instrucciones, suministrando instrumentos con tal fin, y si en todo caso, está dentro de sus responsabilidad como persona jurídica, el cumplimiento de la obligación cuya inobservancia se sanciona en el presente caso.

7. Anejo a lo anterior resulta de necesario estudio el tema de la declaración aduanera de mercancías y el responsable de efectuarla, según la regulación del artículo 86 de la Ley General de Aduanas que dispone :

“ . . . Con la declaración se expresa libre y voluntariamente el régimen, al cual van a ser sometidas las mercancías y se aceptan las obligaciones que el régimen impone.

La declaración aduanera efectuada por un agente aduanero se entenderá realizada bajo la fe de juramento. El agente aduanero será responsable de suministrar la información y los datos necesarios para determinar lo obligación tributaria aduanera, especialmente respecto a la descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria, cantidad, tributos aplicables, cumplimiento de las regulaciones arancelarias y no arancelarias que rigen para las mercancías, de conformidad con lo previsto en esta ley, otras leyes y disposiciones aplicables . . .” (El subrayado no es del original)

Este Tribunal no está prejuzgando sobre la eventual participación del agente aduanero persona física en el presente caso, lo cual sería violatorio de su derecho de defensa. De lo que se trata es de determinar que no se ha demostrado en autos, de dónde deriva la responsabilidad para sancionar a la persona jurídica, puesto que la resolución impugnada es omisa en ese sentido y simplemente se limita a tener por cierto que se realizó una declaración incorrecta en el valor aduanero.

Congruente también con lo anterior, el tipo infraccional que se pretende aplicar para sancionar a la Agencia en referencia, a saber, el 236 inciso k) señala que se impondrá una multa de quinientos pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional, a la persona física o jurídica, auxiliar o no de la función pública aduanera que : **“Como agente aduanero, presente o transmita la declaración aduanera de importación o exportación omitiendo cualquiera de los requisitos documentales o la información requerida por esta ley o sus reglamentos para determinar la obligación tributaria aduanera o demostrar el cumplimiento de otros requisitos o la realice con errores o inexactitudes”**., debe ser aplicado conforme con lo que venimos exponiendo.

8. Consecuentemente como lo ha reiterado en diversos fallos este Tribunal, debe anularse el proceso incoado por la Administración, toda vez que no consta la participación de la persona jurídica, en los hechos investigados, en virtud de existir un vicio en sobre los elementos objetivos del acto emanado por la Aduana de Caldera y no advertido por la Aduana y Dirección General. Específicamente del elemento motivo respecto del presupuesto de hecho, el cual doctrinariamente se define como aquel propuesto por la norma para que el acto pueda y deba ser dictado por la administración. En ese aspecto el jurista español Eduardo García de Enterría indica : “ Si la Administración ejecuta la ley, en el sentido que hemos visto (esto es, en cuanto la ley otorga a la administración potestades de obrar, resulta que la ley como imperativo abstracto conecta una cierta consecuencia jurídica a un tipo de hecho específico, precisamente, y no a cualquiera, indeterminadamente (...). El acto administrativo no es más que el ejercicio de una potestad, por lo que el mismo solo puede dictarse en función del presupuesto de hecho dictado por la norma de cuya aplicación se trata”. (Curso de Derecho Administrativo, Tomo I). Por lo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128, 131, 132 y 133 y concordantes, y artículos 165 a 172 de la Ley General de la Administración Pública, debe este Tribunal, según sus competencias y el incidente de nulidad presentado por el recurrente, declarar la nulidad del acto sancionatorio emitido. Lo anterior sin

perjuicio de las acciones que pueda iniciar la Dirección General de Aduanas, para comprobar la posible comisión de la infracción a que refiere el presente asunto.

POR TANTO

De conformidad con el artículo 91 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, los artículos 204, 205 y 208 de la Ley General de Aduanas, se resuelve declarar la nulidad de todo lo actuado. Remítanse los antecedentes a la Dirección General de Aduanas. Voto salvado del Lic Dick Reyes quien declara mal admitido el recurso. **Notifíquese a la Dirección General de Aduanas en sus oficinas centrales y a la Agencia de Aduanas Aduanera Ya S.A, en sus oficinas centrales ubicadas en avenida primera, calles 21 y 23, Edificio Sasso, quinto piso, San José.**

Alejandra Céspedes Zamora

Luis Alberto Sánchez Gómez

Elizabeth Barrantes Coto

Dick Rafael Reyes Vargas

José Alberto Martínez Loría

Ronald Garita López

**Loretta Rodríguez Muñoz
Presidenta**

VOTO RESERVADO DEL LICENCIADO REYES VARGAS. Origen y naturaleza de la pretensión del recurrente. El presente recurso, se origina en proceso sumario, iniciado por la Aduana Central, dirigido a determinar si la errónea indicación del valor aduanero,

efectuado por el agente aduanero ADUANERA YA, S.A., en la declaración aduanera a la importación número 506164 de octubre 23 de 1996, constituye la infracción descrita y sancionada en el numeral 236. k de la Ley General de Aduanas, en adelante LGA y de ser así, imponer y ejecutar la sanción. Mediante resolución número 840-AC-97 de junio 18 de 1997 la aduana estima existe la infracción e impone la pena. Es respecto de tal acto, que el señor Miguel A. Porras Jimenez en su calidad de agente aduanero de la agencia de aduanas precitada, establece la alzada para ante este Tribunal.

Naturaleza del Tribunal Aduanero Nacional. Estimo pertinente, a efecto de resolver, tenerse presente la naturaleza jurídica del Tribunal Aduanero Nacional, en adelante TAN, con el propósito de determinar sus competencias y potestades a la hora de decidir. A tales efectos, recordemos que dicho Tribunal, tiene idéntica naturaleza que el Tribunal Fiscal Administrativo, respecto del cual, la Sala Constitucional en su voto número 1148-90 de las 17 horas de setiembre 21 de 1990, en lo de interés indico:

“Así por ejemplo, no parece incompatible con la Constitución la existencia del Tribunal Fiscal Administrativo (Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Ley No. 4755 de 3 de mayo de 1971), en la medida en que, si bien se integra y funciona de manera semejante a la de los tribunales de justicia – “tribunales” propiamente dichos -, en realidad solo es un órgano de tutela administrativa o jerárquico impropio respecto de la llamada “Administración Tributaria”, y sus fallos no tienen otro efecto que el de agotar la vía administrativa, abriendo paso a la acción jurisdiccional propiamente dicha.”

Por otro lado, la Procuraduría General de la República, en su pronunciamiento número C-012-98, de enero 21 de 1998, ha señalado claramente que es al TAN a quien corresponde, en virtud de una desconcentración máxima de la materia aduanera, resolver en última instancia administrativa de los recursos que se presenten contra el Servicio Nacional de Aduanas.

En virtud de lo anterior tenemos que el TAN, resulta en un superior no jerárquico de la llamada Administración Aduanera. Tal situación, la de jerarca impropio, no es exclusiva del TAN, sino que opera desde hace mucho tiempo respecto de otras administraciones como la registral, la técnica de aviación civil, la municipal, cuyo superior jerárquico resulta ser el Tribunal Superior De lo Contencioso Administrativo, la Tributaria cuyo competencia de agotamiento de vía le corresponde al Tribunal Fiscal Administrativo, siempre en tratándose de tributos nacionales, la de servicio civil que agota el Tribunal de Servicio Civil, etc. Los recursos ante tales órganos de agotamiento de la vía administrativa, como se observa, son no jerárquicos en sentido estricto, por lo que se les conoce como jerárquicos impropios. Su competencia, se justifica en la necesidad de que, un órgano especializado, jurídica y técnicamente, como autónomo en su decisión, es decir ajeno a criterios de oportunidad, conveniencia, y otros, revise la legalidad de los actos de tales administraciones, de manera que en esta forma se mejore el estado de derecho en que se fundamenta nuestra organización como estado.

En virtud de los fines y competencias asignados a los jerarcas impropios, y con el fin de evitar la tendencia humana de invadir competencias, es que a los mismos se le fija una serie de limitaciones en el ejercicio de la suya propia. Entre ellas, tenemos la imposibilidad de revisar oficiosamente las actuaciones de la administración A Quo, la de anular de oficio, la de conocer únicamente por vía recursiva y limitado a las pretensiones y cuestiones de hecho planteadas por el recurrente (arts. 180, 181, 184 de la Ley General de la Administración Pública, en adelante LGAP.)

Incompetencia del Tribunal Aduanero Nacional en materia de nulidades. Es claro entonces que el TAN, en materia de nulidades, tiene limitada su competencia a conocer de aquellas que expresamente aleguen las partes y que en virtud de recurso se le autorice su conocimiento. Dicha competencia, cuando así se le otorga, viene limitada a su vez, y de manera estricta, a los aspectos alegados por las partes, no pudiendo conocer de manera amplia o extensiva las mismas, por lo que se debe limitar a señalar la existencia o inexistencia de los motivos de nulidad expresamente alegados.

El presente caso. En el caso de marras, el suscrito disiente del voto de mayoría, en virtud de las siguientes situaciones:

Primero porque el voto de mayoría, decreta la nulidad por aspectos no alegados por el recurrente, a criterio del suscrito, en abierta contradicción con lo establecido por el numeral 184 de la LGAP, como de los numerales 180 y 181 ibídem ya analizados supra. En efecto el interesado alega nulidad en virtud de una ausencia de razonamiento jurídico como de conocimiento del fondo del asunto en la resolución impugnada. Como vemos tales alegatos refieren a aspectos de fondo cuya nulidad solo puede entrarse a conocer además previo cumplimiento de los requisitos de admisibilidad que como veremos adelante no concurren.

Segundo por fundamentar su fallo en la ausencia del elemento motivo. En efecto el fallo señala como fundamento para decretar la nulidad, la ausencia de uno de los elementos constitutivos del acto a saber el motivo (Considerando 8). Para ello señalan que, la Administración no demuestra que, respecto del agente aduanero persona jurídica, hayan concurrido en la especie, los supuestos regulados por el artículo 254 de la LGA, en adelante LAN (Considerando VI). A mi criterio, confunde la mayoría el motivo con la legitimación. En efecto, estimo no existe la ausencia del elemento motivo por cuanto incluso el mismo recurrente reconoce la existencia del error en la declaración aduanera, respecto del cual alega falta de tipicidad como de culpabilidad, aspectos no analizados por la mayoría, que no obstante decretan la ausencia de motivo. Opino confunde la mayoría el motivo con la legitimación ad causam pasiva, que necesariamente debe existir entre el imputado y el presupuesto de hecho a efecto de poder sancionarlo y que al final resulta en un asunto de fondo y no de nulidad.

Tercero por lo que estimo, como una contradicción en el fallo, en tanto tiene al recurrente, quien alega actuar como agente aduanero y representante legal de la indiciada, como personero de la sociedad, autorizándole su actuación en la presente

causa, sea legitimándole activamente en el proceso; mientras, por otro lado, le tiene como no personero de la sociedad a efecto de estimar no ocurren los presupuestos procesales que exige el numeral 254 de la LAN. Téngase muy en cuenta que el señor Miguel A. Porras Jimenez, es simplemente el agente aduanero de la sociedad procesada, mas no el representante legal de la sociedad y así comparece. Sobre el punto ya en otras ocasiones he indicado:

“Sobre el particular, es necesario aclarar que tanto el Cauca II (art. 94) como la Ley General de Aduanas, en adelante LGA (art. 33 párrafo primero), establecen una variación en cuanto al concepto anterior del Agente Aduanero, en tanto se elimina la posibilidad de otorgar tal carácter a personas jurídicas. Por lo anterior toda la regulación sobre la materia parte del concepto de agente aduanero persona física. De manera que las regulaciones contenidas en los numerales 253 y 254 de la LGA se dan, como necesarias ante la preexistencia de la autorización a tales sociedades y el necesario respeto de sus derechos adquiridos. Es por ello que la calidad de agente aduanero persona física autorizado para intervenir a nombre de un agente aduanero persona jurídica, lo es exclusivamente en el ámbito de los regímenes y operaciones aduaneras, como en forma clara se indica en el numeral 253 párrafo 2 en relación con el 33 de la Ley General de Aduanas (en igual sentido y por mera ilustración, véase los artículos 129 párrafo 2 en relación con el 128 del CAUCA Ley 3421 de setiembre 30 de 1964). En ningún momento, tal normativa autoriza o legitima, al agente aduanero persona física, como representante legal o mandante del agente aduanero persona jurídica en procesos de responsabilidad administrativa u otra naturaleza diferente a las de los regímenes y operaciones aduaneras ámbito al cual se reduce la representación señalada en el citado artículo 253. Lo contrario, implica otorgar a un agente aduanero, persona física, por el hecho de prestar sus servicios a otro agente aduanero persona jurídica, una mayor capacidad de la que la legislación otorga y concibe para éste auxiliar. Por lo anterior, estimo que el agente de aduana persona física que actúa por cuenta y a nombre de un

agente de aduana persona jurídica, en tratándose de procesos de responsabilidad administrativa, carece de capacidad para representarlo, en especial si partimos del hecho que éste último (la persona jurídica), es que solo por vía de excepción, que resulta imputable, como claramente se establece en el párrafo final del artículo 254 de la LGA. Es precisamente en el último párrafo de este artículo en que encontramos el sentido de la representación. Véase que indica que la sanciones se aplicaran a la persona jurídica cuando se demuestre que los representantes legales o los personeros han propiciado actos o hechos que posibilitan la sanción, luego dice que en caso contrario responderá únicamente el agente de aduanas acreditado. Dicho párrafo pues niega al agente aduanero el carácter de representante legal e incluso de personero. Reconocer tal carácter como lo hace el voto de mayoría no solo resulta contrario a derecho, sino y además, implica reconocer la responsabilidad de la empresa misma que niega el fallo de mayoría. Por lo anterior dicho fallo resulta contradictorio en tanto tiene al agente aduanero como representante legal o personero de la indiciada, no obstante estima su actuar no genera la responsabilidad que establece el párrafo final de la norma supraindicada, sea a efectos procesales es su representante legal o personero pero para efectos de responsabilidad tal representación o personería no le vincula con su representada. Admitir tal representación es además admitir que eventualmente, un mismo sujeto represente intereses contrapuestos, como ocurre cuando tal responsabilidad se exija a la persona jurídica o a ambos a la vez, en donde cada parte intentara demostrar la responsabilidad de la otra”

Por último, debo señalar que el presente recurso se encuentra mal admitido, por cuanto, como lo señalará supra, el recurrente en ningún momento ha alegado otra representación más que la de agente aduanero de la agencia de ADUANERA YA, S.A. por lo que en tal condición carece de legitimación ad procesum, debiendo ser el deber de la Aduana haber negado el trámite.

Es por todo lo anterior que me separo de la mayoría y declaro mal admitido el recurso por encontrarse firme la resolución recurrida al no haberse recurrido en tiempo y forma por persona legitimada para ello.

DICK RAFAEL REYES VARGAS